

El desafío de la diáspora al Estado y la ciudadanía*

Las protestas masivas de los emigrantes en Estados Unidos, quienes reclaman una ley que les permita trabajar y residir de forma legal en ese país, han llamado la atención de América Latina. El reclamo tiene lugar cuando el Congreso de aquel país discute una ley para enfrentar el fenómeno de los inmigrantes indocumentados, mientras militariza su frontera sur y las legislaturas estatales aprueban leyes para dificultarles la movilidad y el acceso a los servicios básicos. Por lo general, este fenómeno de la emigración masiva es analizado desde una perspectiva exclusivamente económica, aunque algunos estudios incluyen análisis sociales y culturales. El fenómeno posee otras dimensiones, las cuales no deben ser olvidadas. Se sabe mucho de su impacto económico, menos de las novedades sociales y culturales que ha traído y casi nada de los desafíos políticos que plantea. Sin embargo, estas tres últimas dimensiones —la social, la cultural y la política— repercuten en la actividad económica. En este editorial se señalan los desafíos que la emigración masiva de indocumentados plantea al Estado y a la ciudadanía salvadoreños.

El enfoque es pertinente, cuando la sociedad y el gobierno salvadoreños reclaman los derechos sociales y políticos de los emigrantes en Estados Unidos. El reclamo no deja de ser paradójico, porque el Estado salvadoreño, atrincherado en su conservadurismo proverbial, los obliga a vivir en unas condiciones tales que los fuerza a abandonar el país. La emigración masiva no sólo cuestiona la forma correcta de invertir las remesas, sino que también cuestiona la soberanía nacional, la representatividad del régimen democrático, el sistema político y el sistema de partidos. La defensa de los derechos sociales y políticos obliga a revisar a fondo la institucionalidad salvadoreña, desde la perspectiva de los que viven allá, es decir, desde la inserción de los emigrantes en la globalización.

1. La emigración en tiempos de globalización

El gobierno salvadoreño, los grandes empresarios y sus voceros, ya sean periodistas o los llamados “analistas”, insisten en la necesidad y urgencia de insertar el país en la globalización. Pero su visión es bastante

* Editorial, pp. 379-391.

limitada, pues sólo la consideran desde la perspectiva comercial. Mucho antes que la descubrieran y se plantearan la introducción del país en ella, unos dos millones de salvadoreños ya se habían insertado. Desde esta realidad, la preocupación del gobierno y de los grandes empresarios por no quedarse fuera de la globalización carece de sentido, puesto que el país ya está metido en ella. Otra cuestión es discutir quiénes y cómo “se insertan” y quiénes y cómo “se quedan fuera”. La inserción de tantos salvadoreños y salvadoreñas no sólo plantea desafíos para la comercialización y para evitar que el sistema actual fracase, sino que cuestiona la construcción y el ejercicio de la ciudadanía, la configuración del Estado y la conformación del régimen democrático, en cuanto forma de organización.

En efecto, la emigración salvadoreña es anterior a la globalización y a los esfuerzos de su exclusiva elite empresarial por aprovechar sus oportunidades comerciales. La globalización articula las comunidades residentes en Estados Unidos, y en otros continentes —Australia, Europa y el Cercano Oriente—, con las comunidades de acá. Potencia y amplía las relaciones de poder de los integrantes de estas comunidades, para las cuales las fronteras físicas o los conceptos políticos de nación o identidad no representen ningún obstáculo. Así, pues, la globalización es mucho más que relaciones comerciales transcontinentales e incluye la interacción social de comunidades, en una escala amplia y en magnitud creciente. La mayoría de estas comunidades vive en la sociedad estadounidense, pero sin romper sus vínculos familiares, sociales y culturales originales. En este sentido, son comunidades salvadoreñas en diáspora, puesto que interactúan con aquella sociedad, pero sin dejarse absorber por ella. En cuanto la emigración comprende movimientos poblacionales, a través de regiones e incluso de continentes, forma parte de la globalización. Por lo tanto, no debe ser considerada causa o efecto de ésta, aunque con ella adquirió una nueva dimensión. Es más, la emigración puede ser considerada como una manifestación “local” de la globalización.

Además de privilegiar el enfoque económico, los estudios de la emigración muestran preferencia por analizar su impacto en la sociedad receptora donde, inexorablemente, el flujo masivo provoca transformaciones inesperadas como, por ejemplo, la hispanización de algunas ciudades estadounidenses o de algunos sectores de las mismas. De aquí surge el interés en los enfoques multiculturales, de seguridad nacional o incluso xenófobos.

Ahora bien, la dinámica de este movimiento poblacional debe observar también el impacto en la sociedad o en el país expulsor. Desde esta perspectiva, la diáspora salvadoreña desafía los fundamentos tradicionales del Estado nacional, en particular los conceptos de ciudadanía y soberanía. Por otro lado, la naturaleza masiva y, aparentemente, inagotable del flujo de emigrantes salvadoreños indocumentados cuestiona la capacidad de los estados que se encuentran en su ruta —guatemalteco, mexicano y estadounidense— para resguardar sus respectivas fronteras. Estados Unidos, en concreto, ha reaccionado de forma radical y ha militarizado su frontera sur. México deja al emigrante a merced de funcionarios, bandas criminales y, últimamente, pandilleros, que abusan de ellos. Todos los estados discuten sobre la emigración en términos de amenaza para la seguridad nacional y

regional. Por presiones estadounidenses, los “guías”, conocidos popularmente como “coyotes”, son acosados por el gobierno salvadoreño. Pese a la hostilidad, el oficio aún no ha sido erradicado. La diáspora y la comunidad de acá aprecian mucho al “guía” responsable y pagan bien sus servicios.

La población que abandona El Salvador, indocumentada o no, no sólo experimenta el desarraigo de su entorno familiar, social y cultural, sino que también pierde su ciudadanía, entendida como reconocimiento social y jurídico, que le otorga derechos e impone deberes. Dado que el fundamento de esta última es territorial y cultural, con el desarraigo experimenta un recorte radical. La pérdida de sus derechos y deberes implica también la pérdida de la igualdad ciudadana. De esta manera, el emigrante se convierte, de hecho, en ciudadano salvadoreño de segunda categoría. Esta limitación podría ser recompensada con la adquisición de la ciudadanía estadounidense, pero la inmensa mayoría de la diáspora salvadoreña no se nacionaliza. En parte, porque no posee los documentos requeridos, y, en parte, porque su tramitación implica pasar por un proceso largo, engorroso y caro, tanto que incluso aquellos con documentos se resisten a nacionalizarse. Una de las propuestas discutidas, en la actualidad, en el Congreso estadounidense confirma lo anterior. La regularización de todos los inmigrantes comprendidos en esa propuesta supondría para el fisco un ingreso de unos 24 mil millones de dólares, en concepto de impuestos. La alternativa a la nacionalización es el estatuto intermedio de la residencia, el cual brinda seguridad jurídica, pero excluye el ejercicio pleno de la ciudadanía política, aunque el beneficiado es obligado a cumplir con bastantes de sus deberes. En consecuencia, el inmigrante retiene su ciudadanía salvadoreña, pero una de segunda categoría. No obstante, goza de más derechos en Estados Unidos que en El Salvador, aun sin la ciudadanía de aquel Estado. Al menos tiene derecho a la educación gratuita y al empleo, a la salud y la vivienda, aunque con restricciones, según el Estado.

El ejercicio de la ciudadanía política salvadoreña depende de las pocas oportunidades institucionales que el gobierno ofrece al emigrante. Según la Constitución (Artículo 72), El Salvador reconoce los derechos del sufragio, de organizar o formar parte de partidos políticos y de optar a cargos públicos. En la práctica, excepto la pertenencia a un partido, el gobierno no le permite ejercer los otros tres derechos. El derecho al sufragio, por ejemplo, no lo admite, ni lo favorece. Ninguno de los partidos políticos tiene una política institucional para favorecer la integración de la diáspora, con lo cual este derecho constitucional también queda anulado, aunque sí la utilizan para sus fines. En pocas palabras, el emigrante sólo puede ejercer la ciudadanía plena en Estados Unidos, pero para ello debe someterse al proceso de naturalización. Aunque siempre será salvadoreño, no puede ejercer plenamente su ciudadanía original. De esta forma, las desigualdades económicas, sociales y culturales, cuya sola existencia atenta contra el derecho de igualdad al cual da acceso la ciudadanía, se amplían más aún.

Ahora bien, independientemente del estatuto del emigrante —doble ciudadanía, residencia o indocumentado—, por lo general, éste no rompe con su identidad salvadoreña. El naturalizado jura lealtad a Estados Unidos, pero no le entrega su identidad, también es leal a El Salvador y sobre todo

a su lugar de origen. Adopta la cultura estadounidense, pero no por eso abandona la salvadoreña. Habla inglés, e incluso puede que lo haga de forma impecable, pero también habla español salvadoreño. Sus hijos pueden haber adquirido el inglés como primer idioma, pero a veces y en un segundo momento, aprenden español. Conoce cada vez mejor Estados Unidos, pero intenta que no olviden El Salvador. Viaja para asistir a las fiestas patronales de su municipio, un lugar de encuentro e intercambio de experiencias, y participar en las celebraciones familiares —bautizos, bodas, etc.—, que hacen coincidir con su visita. Las relaciones familiares, sociales y solidarias son reforzadas por el ir y venir de quienes poseen ciudadanía o residencia estadounidense. La lealtad a la tierra que lo vio nacer es más poderosa que la que pueda guardar a Estados Unidos. Por eso, pide ser sepultado en el cementerio de la localidad, la cual considera su verdadera tierra. Estados Unidos, al fin y al cabo, no es más que una tierra de paso.

Esta doble lealtad e identidad no posee el mismo peso específico. Por lo tanto, hay que adoptar una actitud cautelosa y no caer en la trampa de los sectores sociales y políticos conservadores estadounidenses, que las han idealizado como si representaran una grave amenaza para la cultura anglosajona. El inmigrante salvadoreño y el hispano, en general, no es como el de origen europeo del siglo XX o, más recientemente, el asiático, quien rompió con su lugar de origen. Pero el fenómeno es más complejo y ambivalente de lo que creen esos sectores xenófobos. Los mecanismos de integración estadounidense son fuertes, aunque hablar inglés no significa integración plena. Con los años, el inmigrante aprende a moverse en la sociedad y la cultura estadounidenses como si fueran las propias, pero sin perder la vinculación con la identidad salvadoreña. Por eso regresa; pero no hay que menospreciar la integración en el entorno estadounidense. Se trata de una identidad híbrida, estadounidense y salvadoreña al mismo tiempo, aunque no en proporción igual. El carácter híbrido de esta identidad es sostenida por una relación circular, exclusivamente emotiva en los indocumen-

La población que abandona El Salvador, indocumentada o no, no sólo experimenta el desarraigo de su entorno familiar, social y cultural, sino que también pierde su ciudadanía, entendida como reconocimiento social y jurídico, que le otorga derechos e impone deberes.

tados, pero también física en los ciudadanos o residentes, que pueden viajar sin temor.

2. El pragmatismo gubernamental ante el desafío de la diáspora

A veces, los emigrantes de un mismo municipio o cantón se organizan para promover algunas actividades, tanto allá como acá. La diáspora salvadoreña organizada por lugar de origen es relativamente fácil, porque los vecinos no se dispersan, sino que residen en la misma área. La motivación mediata nace del instinto de supervivencia y del ejemplo de la experiencia mexicana, pionera en la emigración hacia el norte. La motivación inmediata proviene de allegados y amigos, cuyo círculo puede ampliarse, pero siempre predomina la identidad local. De esta forma, la comunidad organizada se constituye en un apoyo importante para cultivar la identidad local y salvadoreña allá, al mismo tiempo que sirve de plataforma para interactuar

con la sociedad estadounidense y para practicar la solidaridad con quienes permanecen acá. El contacto personal y la comunicación —transporte aéreo, teléfono móvil, Internet, correo electrónico, radio, televisión y vídeo—, posibles por el desarrollo y la accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información, son intensos y favorecen el desarrollo de actividades familiares, económicas y sociales.

La estructura interna de esta organización de la diáspora es muy diversa. Las más desarrolladas e institucionalizadas cuentan con dependencias, elaboran y ejecutan proyectos y mantienen una presencia permanente en su lugar de origen, a través de una organización local, de una comunidad religiosa, de una institución o de un representante local. Este referente local goza de su confianza para supervisar la inversión de los fondos enviados y para asesorar sobre visitas y proyectos. Las organizaciones más dinámicas mantienen relaciones con otras organizaciones salvadoreñas también radicadas en ciudades estadounidenses. Asimismo, se coordinan con organizaciones de allá interesadas en el inmigrante. De esta manera, a veces, construyen una compleja red de relaciones sociales allá y acá, que potencia su influencia e incidencia social.

La dinámica de la diáspora organizada descansa en la compleja y variada gama de actividades desarrolladas por sus integrantes más destacados, quienes poseen empresas informales de importación y exportación de una enorme variedad de bienes y servicios o ejercen una profesión —medicina o abogacía— de forma alterna, allá y acá, o en sus viajes cultivan los vínculos solidarios. Las redes sociales de la diáspora facilitan el viaje de allegados, amigos y conocidos, con documentos o sin ellos, con lo cual contribuyen a la reunificación familiar. Brindan asistencia a los recién llegados para asentarlos, encontrarles empleo y acceso a la salud, la educación o la vivienda, y, en general, para insertarlos en el entorno donde residen, con lo cual se radican en la misma área y pueden reproducir la vida familiar y local de su lugar de origen. Asimismo, tienden a reproducir las desigualdades de género y edad. Ahora bien, no todos los emigrantes se integran a una comunidad o participan en su organización. Bastantes se limitan a enviar remesas familiares.

La relación de la comunidad salvadoreña organizada con su lugar de origen no sólo se ha establecido por la ayuda familiar y personal, sino que se ha extendido hasta constituirse cada vez más en canal de comunicación y medio de contacto entre sus integrantes de allá y los que permanecen acá. Las contrapartes de ambos lados, los dirigentes de la diáspora, por un lado, y sus referentes locales, por el otro, viajan con frecuencia para encontrarse y hacerse cargo de las necesidades de los de acá, articular la respuesta y supervisar su ejecución. Pero el desplazamiento de los mensajeros no está relacionado sólo con el financiamiento de la ayuda comunitaria, sino que también llevan y traen información personal y social, así como bienes de toda clase.

La solidaridad surgida alrededor de las necesidades más inmediatas de la comunidad de acá y la respuesta de la de allá se concreta en una serie de proyectos asistenciales. Esta solidaridad hace posible la construcción de infraestructura básica —clínica de salud, aulas o escuela, templo, casa co-

munal, acueductos, carretera e iluminación pública—, el embellecimiento del espacio público —parques y plazas— y la educación —becas, biblioteca, casa de la cultura y educación en salud. La participación directa de la diáspora en la definición de estos proyectos es sobresaliente. Sus primeras intervenciones son más asistenciales que sociales o de desarrollo. Una vez constada su capacidad de intervención y con cierta experiencia adquirida, amplían su interés al área social, paso que podría abrirle camino hacia la intervención más política, lo cual le permitiría hacerse presente para exponer sus demandas e intereses. Pero la desconfianza predominante en ella es un obstáculo, hasta ahora insalvable, para financiar proyectos más ambiciosos y de mayor incidencia.

El impacto económico y social de esta intervención, con todo, no pasa desapercibido, más aún cuando la intervención ocurre en localidades sin acceso a recursos financieros, ni tecnológicos, ni humanos. Los protagonistas de estas intervenciones, inevitablemente, reciben reconocimiento y poder social. Sin embargo, la relación de la diáspora con el gobierno local y con los partidos políticos es bastante difusa y débil, ya que, por un lado, sus intervenciones todavía no han alcanzado suficiente representatividad o aquella no es aceptada como interlocutora válida del entramado de las fuerzas sociales de la comunidad de acá y allá. En efecto, los partidos políticos y el gobierno local no están interesados en reconocer a un interlocutor con poder social y económico, más independiente que los interlocutores locales, con demandas concretas y con una experiencia más rica y amplia del funcionamiento del sistema democrático.

El Estado salvadoreño, movido por el significado que los miles de millones de dólares que la diáspora envía anualmente tienen para la economía nacional, ha prestado mucha atención a la emigración de los tiempos de la globalización. De ahí su interés por asegurar los medios que le garanticen la residencia en Estados Unidos, aunque la gestión consular no es tan agresiva como la mexicana y, a diferencia de ésta, tampoco tiene propuesta para el gobierno estadounidense. El sometimiento de la política exterior de El Salvador a la de Estados Unidos y el sumo cuidado para evitar una confrontación con la Casa Blanca, a raíz de sus políticas imperialistas y su creciente xenofobia, forman parte de este esfuerzo. El Salvador se mantiene al margen de los movimientos y las posturas antiimperialistas latinoamericanas e incluso de las posturas críticas regionales, ante la militarización de la frontera sur. En vez de la confrontación pública, El Salvador privilegia la relación personal y bilateral. En el frente interno, ha fortalecido su relación con la diáspora, a través de una extensa red de consulados, cuya tarea consiste, en teoría, en defender los derechos del emigrante, informarlo y prestarle asistencia en materia legal, orientarlo sobre oportunidades, patrocinar las fiestas religiosas y cívicas nacionales, facilitar las visitas frecuentes de altos funcionarios del gobierno central y local a las comunidades más pobladas, organizar encuentros de empresarios, coordinar proyectos de desarrollo local entre la organización comunitaria y las dependencias gubernamentales, y movilizar a sus integrantes para apoyar al gobierno central en sus gestiones ante el gobierno estadounidense. La misión fundamental del cónsul es evitar que la diáspora rompa los vínculos familiares y

sociales con El Salvador y la localidad que la vio nacer. No obstante su limitación, los emigrantes aprecian los servicios consulares.

En esta misma línea, el Estado salvadoreño ha creado instituciones o establecido programas para apoyar al emigrante. Ha interpuestos sus buenos oficios ante los estados guatemalteco y mexicano, cuyo territorio atraviesa el gran flujo de emigrantes, para intentar contener los abusos. Proporciona la documentación que respalda la identidad del deportado sin papeles. Todas estas actividades, incluidas las consulares, han supuesto una mayor asignación presupuestaria destinada a las necesidades más inmediatas de la diáspora. De esta manera, el gobierno salvadoreño ha cambiado radicalmente su actitud ante el emigrado, a quien, hasta no hace mucho, consideraba como un violador de la legalidad e incluso como delincuente, tal como el sector estadounidense más reaccionario intenta catalogarlo. Con todo, todavía pesa mucho el desprecio hacia el deportado, quien es tratado como delincuente, aun cuando sólo una minoría cae en esta categoría. El trato denigrante dado al deportado responde a un doble motivo. Por una parte, constituye una de tantas formas que ha encontrado el gobierno salvadoreño para congraciarse con el estadounidense, tan dado a esta clase de estereotipos. Pero más profundamente, y quizás de forma inconsciente, el deportado es denigrado porque se lo considera, desde una perspectiva social, como un emigrante fracaso, en contraposición al exitoso, aquel que consigue permanecer allá, donde ha encontrado un empleo estable y bien remunerado, que le permite enviar remesas.

En esta misma línea, el aumento y la diversidad de viajeros han multiplicado y complicado mucho el trabajo de las dependencias de la migración salvadoreña. A medida que el tránsito por las fronteras nacionales se vuelve más fácil, el control de una gran variedad de inmigrantes —permanentes, trabajadores con permiso, estudiantes, turistas, asilados, inversionistas, etc.— es más complejo. La expulsión de población en gran escala de la zona oriental ha atraído, por otra parte, a decenas de miles de nicaragüenses y hondureños, cuya presencia demanda cierto control gubernamental sobre sus actividades y desplazamientos, así como la protección de sus derechos fundamentales. La misma ley de migración, que data de 1958, aunque ha sufrido varias reformas, la última en 1993, es obsoleta. Carece de procedimientos para deportar o detener administrativamente al extranjero indocumentado sudamericano, caribeño o asiático, que cruza el territorio salvadoreño, en tránsito hacia el norte. La emigración de los tiempos de la globalización superó a esta dependencia gubernamental hace ya varios años.

El gobierno salvadoreño se ha visto obligado a contar con la diáspora organizada, dada su relevancia económica y social, en la respectiva localidad. El gobierno nacional ha identificado en ella una oportunidad única para obtener beneficios económicos y políticos. Por lo tanto, su relación no está movida por una solidaridad nacionalista genuina, sino por el pragmatismo. Está interesado en aprovechar el potencial económico de sus remesas, en su capacidad para financiar las campañas electorales de ARENA y en su influencia para que allegados y conocidos voten por dicho partido, en las elecciones nacionales y locales. Su preocupación por asegurar su permanencia y estabilidad allá responde a este interés. Aparte que un regreso

masivo, bastante improbable, o una dificultad mayor para traspasar la frontera sur de Estados Unidos, mucho más probable, aumentará la presión social sobre el gobierno de ARENA. La buena relación que éste mantiene con la Casa Blanca, entre otras cosas, se ha traducido en sucesivas prórrogas del estatuto de protección temporal, el cual permite a decenas de miles de emigrantes permanecer en Estados Unidos legalmente. Cuanto más tiempo permanezca allá la diáspora y entre más posibilidades tenga para encontrar empleo, mayores son las probabilidades de continuidad del flujo de dólares hacia acá. En esta misma línea, el gobierno mantiene programas orientados a cultivar su lealtad y su identidad salvadoreña. En definitiva, el gobierno salvadoreño está muy interesado en ella, porque la considera una fuente de dólares imprescindible para la estabilidad del modelo, el desarrollo local y las actividades partidistas, un agente político con poder para influir en la conducta electoral de sus familiares y allegados y como un abogado potencial de sus intereses y causas en Estados Unidos.

La diáspora no parece dar mayor importancia a esta instrumentación gubernamental. En Estados Unidos, su prioridad política es la regularización de sus integrantes, más que ejercer sus derechos políticos de ciudadanía salvadoreña acá —el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la discriminación, a la administración de justicia y a la libertad de prensa e información. No hay que perder de vista que la mayoría de la diáspora está indocumentada y no piensa regresar de forma permanente a su lugar de origen. En Estados Unidos no puede ejercer estos derechos políticos, porque se encuentra indocumentada; aquí tampoco, porque se los niegan. El único derecho que los partidos y el gobierno salvadoreño estarían dispuestos a concederle es el del sufragio. No discuten su participación en la selección de las candidaturas, ni consideran nominar candidatos vinculados a ella. Tampoco la toman en cuenta en la planificación del desarrollo local y nacional, ni incluyen sus intereses en la agenda política nacional y local, ni le permiten supervisar la gestión de la hacienda pública, pese a que sin sus dólares no podría mantenerse a flote. En cualquier caso, con ciudadanía estadounidense o sin ella, el contraste en la práctica de los derechos políticos de la ciudadanía allá y acá no le pasa desapercibido.

En el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, otro derecho ciudadano, es donde más avance ha habido, pero no por iniciativa del gobierno o del sector privado salvadoreño para crear empleo digno, sino por las remesas familiares y la red de relaciones sociales de la diáspora. En efecto, las remesas han abierto a muchas familias salvadoreñas la posibilidad para acceder a la educación y a la salud y, en menor medida, la vivienda. Las remesas familiares y la inversión social de la diáspora han contenido el avance de la pobreza nacional, pero no la desigualdad, la cual aumenta cada vez más. En efecto, el impacto de la contribución de la diáspora debe tomarse con cautela, porque la tasa de desocupación abierta, la tasa de desempleo urbano y juvenil, y el peso del empleo informal sobre el formal se han conservado intactos e incluso, en algunas localidades o casos, han experimentado retrocesos. En consecuencia, la integración social, uno de los elementos fundamentales de la dimensión social de la ciudadanía, ha retrocedido.

3. La difícil relación de la diáspora con los partidos políticos

La diáspora salvadoreña no sólo representa un desafío para la institucionalidad estadounidense, sino también para la salvadoreña, en particular para los partidos políticos, en cuanto intermediarios de las demandas de la población de allá y acá. Estos, al igual que el gobierno central, buscan cómo aprovechar su potencial y, de hecho, compiten entre sí por la representación de sus intereses. Por consiguiente, es otra relación exclusivamente pragmática. Por el otro lado, algunos dirigentes de las organizaciones de allá desearían intervenir de forma más determinante en las decisiones políticas de acá.

Los partidos políticos, sobre todo ARENA y el FMLN, se esfuerzan por relacionarse directamente con la diáspora organizada, en Estados Unidos, y de manera indirecta, a través de su contraparte local. Al igual que el gobierno, los partidos no están interesados en representar la agenda de la diáspora, sino en aprovechar su potencial para sus fines partidarios. Prueba de ello es la despreocupación de las cúpulas de los dos partidos grandes por promover su participación directa en las decisiones políticas locales y nacionales. Ni siquiera le han concedido el derecho para ejercer el sufragio. En buena medida, esta visión utilitarista obstaculiza al emigrado el pleno ejercicio de su ciudadanía salvadoreña acá.

La relación de ARENA y del FMLN con la diáspora de Estados Unidos ha evolucionado desde 1992. Durante la guerra civil, las primeras organizaciones de aquella se especializaron en la defensa de los derechos humanos y, en consecuencia, tendieron a apoyar al FMLN. Después de 1992, la mayoría de estas organizaciones desapareció. Otras se desvincularon del FMLN, aunque todavía se consideran de izquierda, pero sin identificarse con este partido. Ya en el contexto de la globalización y por exigencia de la dinámica interna de la misma diáspora, apareció una organización interesada en defender sus derechos, sobre todo los del indocumentado, y en promover la agenda de la comunidad local, allá y acá. La vitalidad de este nuevo énfasis, la problemática migratoria y la incidencia creciente en la realidad local y nacional atrajeron al FMLN, el cual también promueve la defensa de los derechos humanos y, además, la memoria histórica, cuya conservación considera fundamental para conservar el vínculo con el lugar de origen. Por eso, el partido se hace presente en las actividades culturales, cívicas y religiosas de la diáspora. Al mismo tiempo, el FMLN cuenta con bastantes comités de apoyo partidario en Estados Unidos —y menos en Canadá y Australia.

En el otro extremo del espectro político salvadoreño, ARENA está muy interesado en la defensa del indocumentado y de los derechos humanos de la diáspora, aunque por razones distintas. El interés de ARENA en la diáspora y en su futuro responde a su capacidad económica y a su poder

El gobierno salvadoreño se ha visto obligado a contar con la diáspora organizada, dada su relevancia económica y social, en la respectiva localidad. El gobierno nacional ha identificado en ella una oportunidad única para obtener beneficios económicos y políticos. Por lo tanto, su relación no está movida por una solidaridad nacionalista genuina, sino por el pragmatismo.

social, en el nivel local. En 2001, el partido de gobierno reconoció estas contribuciones y modificó sus estatutos para crear un octavo sector, dedicado al emigrante. Pero todavía no ha conseguido darle forma.

Las relaciones que estos dos partidos han establecido con la diáspora organizada han reproducido en su interior la polarización que caracteriza a la política nacional. El terreno ya estaba abonado por la simpatía o el rechazo de sus integrantes más politizados a la lucha guerrillera del FMLN o al régimen de ARENA. La extensión y profundidad de esta polarización aún son una incógnita, que futuras investigaciones deberán explorar. Sin embargo, se puede sostener que la diáspora se encuentra muy afectada por el enfrentamiento de estos dos partidos, aunque cabe destacar que no todos sus dirigentes son dóciles a las directrices de las cúpulas de ARENA o del FMLN. Sus dirigentes también “utilizan” a los dos partidos, al margen de su confrontación, en la política nacional, para defender sus derechos y promover su bienestar, tanto allá como acá. Algunos dirigentes, sin embargo, los “usan” para promoverse a sí mismos, en la política local. En estos casos, los dirigentes de la diáspora condicionan su apoyo, allá y acá, a la aceptación de su agenda comunitaria o personal.

Aun cuando ARENA y el FMLN han sabido servirse del potencial de la diáspora para promover su agenda nacional y local, su influencia es desigual. En la elección presidencial del año 2004, por ejemplo, ARENA ofreció estabilidad migratoria a sus integrantes a cambio de influenciar a sus allegados y a sus amistades acá para que votaran por su candidato. En este contexto, presentó al FMLN como una amenaza para dicha estabilidad, ya que no goza de la confianza de la Casa Blanca. Este último, por su lado, intentó en vano contrarrestar este falso mensaje, pues la diáspora lo captó bien y advirtió a sus allegados no votar por un partido que pondría en peligro su permanencia en Estados Unidos, en caso de ganar las elecciones. Pese a esta relación, la diáspora todavía no ha logrado que los partidos políticos salvadoreños asuman sus demandas o defiendan sus intereses. Estos sólo se han avenido a incluir en la nómina de candidatos a concejal o a diputado del parlamento centroamericano a algunos de sus dirigentes. Pero ninguna de estas dos posiciones tiene poder para influir en la toma de decisiones políticas del gobierno nacional o local. Y, en ningún caso, los dirigentes de la diáspora son consultados acerca de la planificación estratégica del desarrollo local o sobre su ordenamiento territorial. Su participación depende de la relación con alguna organización local o en caso de un proyecto con contrapartida gubernamental del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Más allá de esto, la relación con el gobierno local es frágil y, a menudo, poco amistosa, en particular cuando las preferencias partidarias de la diáspora no coinciden con las de aquel.

En Estados Unidos, la prioridad de la diáspora es la regularización de su permanencia. De ahí su interés reciente en la política estadounidense. En El Salvador, en cambio, la diáspora enfatiza el derecho al ejercicio del sufragio, una cuestión que ARENA y el FMLN debaten de forma interminable. Ninguno de los dos partidos pone en duda la legitimidad de este derecho o del reclamo de la diáspora y, en consecuencia, aceptan que su

ejercicio debiera ser facilitado. Pero ARENA y el gobierno nacional exigen estudios rigurosos de la cuestión y regulaciones estrictas sobre los beneficiarios y su domicilio, y la protección y la defensa del sufragio. El FMLN considera el sufragio en el exterior una prioridad, pero no tiene una propuesta concreta. En teoría, la población salvadoreña con Documento Único de Identidad está incluida, de hecho, en el padrón electoral y, por lo tanto, habilitada para votar. De hecho, la mayoría de los dos millones de posibles electores residentes en el exterior, no puede ejercer este derecho. En caso de hacerlo, alterarían de forma impredecible los resultados electorales, y esto es, con toda probabilidad, lo que frena a los partidos grandes.

De esta manera, ARENA y el FMLN no sólo han fracturado de forma artificial a la diáspora salvadoreña, sino que, al mismo tiempo, han obstaculizado la promoción y la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Junto con la polarización exportaron la desconfianza, la falta de credibilidad y la apatía en los partidos políticos y en la política misma. Por eso y por la despreocupación ante sus necesidades, la diáspora no los considera como la institución política idónea para representar sus intereses, sino como medios para satisfacer agendas particulares. Pero, por otro lado, esta desvinculación o desinterés facilita la manipulación de los partidos. Así, ARENA y el FMLN echaron a perder una oportunidad muy valiosa para moderar y modernizar el sistema de partidos políticos. En efecto, la incorporación de la experiencia de la diáspora en el sistema estadounidense de partidos y, en concreto, la representación de intereses sectoriales o locales, podría haber sido trasladada por ella al país. Pero la polarización se impuso, fue más fuerte que la experiencia de la institucionalidad democrática estadounidense. Dicho esto, conviene agregar que las relaciones de los partidos políticos con la diáspora no deben ser sobredimensionadas, porque no toda ella está organizada, ni mantiene vínculos formales con estos. Tampoco se muestra interesada en la organización comunitaria. De hecho, la población de la diáspora organizada representa una proporción relativamente reducida del total.

Independientemente de este bajo nivel de organización o de relación con la institucionalidad salvadoreña, no puede haber un verdadero proyecto de la nación salvadoreña sin incluir a la diáspora, sobre todo cuando es tan representativa, tanto en cantidad como en organización y dinamismo. La nación como unidad política e identidad cultural no puede dejar fuera a esta población que reside y trabaja allende las fronteras territoriales, puesto que representa más de la cuarta parte del total y su contribución económica, política, social y cultural, en la práctica, configura la realidad nacional salvadoreña. Ahora bien, su incorporación sólo es viable modificando el concepto actual de nación. En efecto, la nación salvadoreña real ya no está definida sólo por la residencia en el territorio comprendido en sus fronte-

El Salvador no podrá conformar una unidad política real, ni construir una identidad verdaderamente nacional sin tomar en cuenta a la diáspora y sin dar plena vigencia a los derechos de ciudadanía de los de acá. Sin un proyecto de nación inclusivo, el Estado, entendido como organización pública y jurídica, y como una estructura que aplica el derecho y el régimen democrático representativo del gobierno, no es viable.

ras y gobernada por un mismo Estado. Puede que esta nueva concepción cause cierto asombro al comienzo, pero deja de extrañar cuando es considerada como consecuencia lógica de los tiempos de la globalización. La nueva realidad política y social obliga, en consecuencia, a replantearse los conceptos tradicionales de soberanía, ciudadanía, relaciones políticas y sociales. No obstante, este desafío es demasiado radical para un gobierno y para unos políticos como los salvadoreños que, por tendencia innata, son conservadores en extremo, aunque los de la derecha se consideran a sí mismos como muy modernos, muy audaces y visionarios. La apertura de la globalización va mucho más allá de las relaciones comerciales y representa una oportunidad, inesperada sin duda, para aprovechar la riqueza humana, política y social, al mismo tiempo que posee un potencial transformador impredecible. No asumir este desafío significaría perder a casi un cuarto de la población salvadoreña, y junto con ella, su riqueza humana y social, acumulada en la diáspora, su contribución para repensar y construir una nación, conforme a la realidad de la globalización, su potencial para establecer relaciones transnacionales, todo lo cual, como se constata, va más allá de sus aportes económicos. Perder esta experiencia tan rica en innovación, pero también en humanidad y solidaridad, no contribuirá al fortalecimiento de los lazos actuales, sino que podría desatar una dinámica indeseable hacia el debilitamiento o incluso el rompimiento.

La promoción y la defensa efectiva de los derechos ciudadanos de la diáspora, y de la población salvadoreña en general, demandan mecanismos institucionales y jurídicos de nuevo cuño, así como de una elite política visionaria y audaz, liberada de las ataduras de un pasado decimonónico ya obsoleto y comprometida con toda la población salvadoreña. Repensar y reconstruir la institucionalidad y la nación desde esta realidad implica abrir espacios para que más sectores accedan al poder y participen en la toma de decisiones. Esta responsabilidad recae de forma directa en el sistema de partidos políticos, en cuanto mecanismo institucional de intermediación de las demandas de los intereses públicos y privados, y en el Estado, responsable de salvaguardar y fortalecer la ciudadanía y los derechos derivados de ella. Es tarea de ambos impulsar la construcción de este nuevo proyecto de nación, donde la diáspora ocupe el espacio político y social que en justicia le corresponde. En la medida en que lo consigan, el Estado derivará no sólo mayor legitimidad, sino que estará mejor preparado para asumir exitosamente el reto planteado por la globalización. La organización comunitaria de la diáspora, por su lado, para influir en las decisiones políticas nacionales y locales, para exigir el ejercicio de sus derechos de ciudadanía e impulsar al mismo tiempo la construcción de este gran proyecto de nación salvadoreña debe hacer un esfuerzo mucho mayor y más coordinado para articular un frente común con la comunidad de acá. El movimiento social del país, con frecuencia tan conservador como el gobierno y los políticos, debe trabajar para independizarse de la agenda de los partidos, los cuales no están interesados en un proyecto de nación inclusivo, al mismo tiempo que se articulan con la organización comunitaria de la diáspora para exigir los derechos de ciudadanía de los de allá y acá.

El Salvador no podrá conformar una unidad política real, ni construir una identidad verdaderamente nacional sin tomar en cuenta a la diáspora y sin dar plena vigencia a los derechos de ciudadanía de los de acá. Sin un proyecto de nación inclusivo, el Estado, entendido como organización pública y jurídica, y como una estructura que aplica el derecho y el régimen democrático representativo del gobierno, no es viable. La fragmentación de la sociedad salvadoreña, o la exclusión de la diáspora, imposibilita que el Estado garantice el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. El desconocimiento de la inserción de la diáspora en la globalización y sus implicaciones políticas y sociales hace a un lado un potencial y un dinamismo que, en el lenguaje mercantilista de moda, haría a El Salvador más competitivo.

La inmigración y las presiones de los sectores estadounidenses más hostiles a ella empujan a la diáspora a aceptar la absorción total por aquella sociedad y su Estado. No puede darse por descontado que esa población mantendrá intacta su vinculación actual con El Salvador. Puede llegar a sentirse cada vez más ajena a la identidad nacional, desarraigada de su lugar de origen, por un lado, y, dadas las presiones sociales y políticas, impulsada a sumergirse en el mundo estadounidense, por el otro lado. Las tendencias retrógradas, predominantes en la sociedad que aún permanece dentro de las fronteras salvadoreñas originales, los partidos políticos y el Estado están dejando pasar la oportunidad para construir un Estado más acorde con la realidad transnacional, en la cual los ha colocado su propia diáspora. En consecuencia, los últimos atisbos de la unidad política y de la identidad nacional que aún quedan en la sociedad salvadoreña se erosionarán más todavía y el margen para la acción política en la economía y la sociedad será menor. El gran desafío es construir, con los aportes de la diáspora, un Estado incluyente, institucionalmente fuerte, pero al mismo tiempo flexible y adaptado a la realidad transnacional salvadoreña.

San Salvador, 2 de junio de 2006.